

Expediente: 249/15

Carátula: LOMA DEL PILA S.R.L. C/ COMUNA DE HUASA PAMPA S/ INCONSTITUCIONALIDAD

Unidad Judicial: EXCMA. CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SALA II

Tipo Actuación: SENTENCIAS FONDO

Fecha Depósito: 29/03/2025 - 00:00

Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:

20243407339 - LOMA DEL PILA S.R.L., -ACTOR

27254984340 - COMUNA DE HUASA PAMPA, -DEMANDADO

JUICIO:LOMA DEL PILA S.R.L. c/ COMUNA DE HUASA PAMPA s/ INCONSTITUCIONALIDAD.- EXPTE:249/15.-

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

Excma. Cámara Contencioso Administrativo - Sala II

ACTUACIONES N°: 249/15



H105021613906

JUICIO:LOMA DEL PILA S.R.L. c/ COMUNA DE HUASA PAMPA s/ INCONSTITUCIONALIDAD.- EXPTE:249/15.-

San Miguel de Tucumán, marzo de 2025.

VISTO: Los autos caratulados “LOMA DEL PILA S.R.L. vs. COMUNA RURAL DE HUASA PAMPA S/ INCONSTITUCIONALIDAD” (expte N° 249/15) y reunidas las vocales de la sala segunda de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, con la integración que surge del proveído de fecha 09/12/2024, se establece el siguiente orden de votación: Dras. Ana María José Nazur y María Florencia Casas; habiéndose procedido a su consideración y decisión con el siguiente resultado:

La señora vocal Dra. Ana María José Nazur, dijo:

Las circunstancias que motivaron el reenvío de este expediente, las posiciones asumidas al respecto por las partes y el modo en que se resolvió la cuestión debatida se encuentran debidamente explicitados en la decisión de la Sala III de esta Cámara del fuero, identificada bajo el número n° 353 de fecha 21/03/2024, por lo que a lo allí expuesto nos remitimos por estrictas razones de brevedad.

Al haber sido casado íntegramente este último pronunciamiento, la causa viene a este Tribunal a fin de que se dicte un nuevo decisorio con arreglo a lo dispuesto por la Excma. Corte Suprema de Justicia en la sentencia n° 1565 del 11/11/2024

CONSIDERANDO:

I. SENTENCIA DE LA CSJT

El Alto Tribunal casó la mencionada sentencia de la Sala III de esta Cámara, dejándola íntegramente sin efecto, sobre la base de la siguiente doctrina legal: “Es arbitraria la sentencia que omite pronunciarse sobre una cuestión conducente para la recta dilucidación del caso sometido a estudio”; y “Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que, producto de una valoración sesgada y distorsiva de la plataforma fáctica obrante en autos, termina apartándose de los términos del reenvío”. Dispuso remitir la causa al mencionado Tribunal a fin de que, por la Sala que por turno corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento sobre la demanda de autos de acuerdo a lo allí considerado.

Para así decidir, tuvo en consideración que “Sabido es que el tribunal de mérito tiene libertad para escoger los caminos que considere más convenientes para abordar y resolver el litigio llevado su conocimiento, con la única condición de que no queden al margen de la decisión elementos que, por su trascendencia, resulten indispensables para emitir un juicio fundado sobre el tema en discusión, el cual no puede realizarse sin un examen completo de los hechos, pruebas y alegaciones conducentes introducidas en el pleito por las partes (cfr. CSJT, 01/11/2019, “Gómez Claudio Norberto vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo”, Sentencia N° 2.027, y sus citas; entre muchas otras)”.

Por ello, consideró que “Desde tal perspectiva, resulta clara la arbitrariedad en la que incurre el fallo atacado, al desentenderse del argumento de la actora basado en que el inmueble de su propiedad no recibe ningún servicio ni beneficio por parte de la Comuna demandada, que justifique el cobro a su respecto del tributo regulado en el artículo 131 de la ley 5.637”. Y continuó: “Es que, a los fines de la debida justificación del rechazo de la demanda, no bastaba con invocar la acreditada existencia de gastos para la realización de obras y servicios por parte de la Comuna, sino que era menester que el órgano jurisdiccional explicara -a contrario de lo que afirma la demandante, y surgiría de las pruebas documental y de inspección ocular obrantes en las presentes actuaciones- de qué manera aquellas erogaciones efectivamente redundan en un beneficio particular del inmueble de propiedad de Loma del Pila S.R.L.”.

El pronunciamiento finalmente dispone hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia N° 353 dictada por la Sala III de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 21/03/2024, protocolizar el dictamen fiscal de fecha 11/06/2024 y dejar sin efecto íntegramente dicho fallo.

II. LA CUESTIÓN A DECIDIR

a. Con miras a la resolución de la presente causa, de acuerdo a los lineamientos efectuados por la Corte en instancia casatoria, conviene recordar que la firma actora, Loma del Pila S.R.L., interpuso demanda en contra de la Comuna Rural de Huasa Pampa con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 131 de la ley N° 5.637 (Código Tributario Comunal), que refiere a la “Contribución que incide sobre los Inmuebles” (CISI), y que se declare ilegítimo su cobro.

En fundamento de su pretensión, expresa que es propietaria de un inmueble inscripto en el Registro Inmobiliario en la matrícula G-1362, Padrón Inmobiliario 390.287. Refiere que el tributo que le cobra la demandada es una tasa, por lo que teóricamente le deberían brindar servicios como contraprestación, lo que no sucede en su caso ya que asegura que la demandada jamás le prestó

ninguno de los servicios expresamente previstos y por ende que justifique su percepción. Agrega que la contribución en cuestión encubre una finalidad recaudatoria, que desnaturaliza la institución tributaria, tornando así incausada la pretensión de la Comuna, al estar reñida con sus facultades propias, meramente declaradas en la ley y no materializadas en la realidad.

La Comuna de Huasa Pampa, por su lado, sostiene que la creación del tributo tildado de inconstitucional ha sido conforme a lo establecido por la Carta Magna local (art. 132), y su percepción por parte de la Comuna se ajusta a lo normado en la ley N° 7.350 (Ley Orgánica de Comunas Rurales) y ley N° 5.637 (Código Tributario Comunal). Agrega que la norma cuestionada sólo está vinculada en forma unipersonal e indirecta con los individuos, en tanto su objetivo primordial reside en el interés general.

La sentencia dictada por la Sala III de esta Cámara había considerado que en autos existen elementos probatorios fehacientes que, considerados armónicamente en su conjunto, acreditan que el inmueble rural de propiedad de la actora se vio beneficiado por algunos de los servicios descritos en la normativa impugnada. Entendió acreditada una efectiva prestación de los servicios previstos en el artículo 131 del CTC, por lo que concluyó que correspondía no hacer lugar a la demanda interpuesta en autos.

Ahora bien, al casar íntegramente dicho pronunciamiento, la Corte local indicó que resulta clara la arbitrariedad en la que incurre el fallo al desentenderse del argumento de la actora basado en que el inmueble de su propiedad no recibe ningún servicio ni beneficio por parte de la Comuna demandada, que justifique el cobro a su respecto del tributo regulado en el artículo 131 de la ley 5.637.

Indicó que la Sala III, al analizar la prueba aportada a la causa, omitió en su razonamiento realizar la siguiente explicación: “Es que, a los fines de la debida justificación del rechazo de la demanda, no bastaba con invocar la acreditada existencia de gastos para la realización de obras y servicios por parte de la Comuna, sino que era menester que el órgano jurisdiccional explicara -a contrario de lo que afirma la demandante, y surgiría de las pruebas documental y de inspección ocular obrantes en las presentes actuaciones- de qué manera aquellas erogaciones efectivamente redundan en un beneficio particular del inmueble de propiedad de Loma del Pila S.R.L”.

En consecuencia, el análisis que debe realizarse en este reenvío versará en torno al material probatorio aportado a la causa a fin de indagar si con él se ha logrado acreditar que las erogaciones efectuadas por parte de la Comuna redundaron en un beneficio particular e individualizado al inmueble de propiedad de la firma actora.

Ello considerando que el recurso casatorio prosperó en tanto la Sala III omitió explicar cómo las erogaciones por proyecto de iluminación y pagos por desmalezamientos, únicos elementos valorados, efectivamente benefician a dicha propiedad.

b. Es del caso recordar que el artículo 131 del Código Tributario Comunal (ley N°5.637) establece: “Por cualquiera de los servicios o beneficios que reciban los inmuebles ubicados dentro del territorio comunal, prestados en forma directa o indirecta, periódica o no por la comuna, no retribuidos con la contribución especial, se pagará anualmente el tributo que se establece en el presente título, conforme a las alícuotas e importes mínimos que fije la Ley Impositiva Comunal.

Los servicios mencionados en el párrafo anterior son: alumbrado público, barrido, limpieza, riego, recolección de basura, desinfección, deshierbe, mantenimiento de la vía pública, conservación de arbolados y jardines públicos, conservación de plazas y espacios verdes, inspección de baldíos, nomenclatura urbana, conservación de acequias, y cualquier otro servicio que preste la comuna y

que afecte o reciban los inmuebles ubicados dentro del territorio comunal.”

Al ingresar al análisis de la cuestión a decidir, vale reiterar que, conforme se sostuvo, la Sala III omitió explicar cómo las erogaciones por proyecto de iluminación y pagos por desmalezamientos - únicos elementos valorados- efectivamente benefician a dicho inmueble; fundamentalmente considerado -como se consignó en el Dictamen del Sr. Ministro Fiscal- que tal consideración se enfrenta al acta de inspección ocular (fs. 67) labrada por el Juez de Paz con motivo del correspondiente medio de prueba de la actora.

Debe señalarse que la prueba adjuntada por la demandada al contestar la demanda, referida a la existencia de diversos programas y proyectos vinculados con la prestación de servicios (iluminación, agua potable, etc., fs. 101, 116 y 118 del expte. adm.), no constituye prueba efectiva de un beneficio concreto al inmueble en cuestión. Esto es así en tanto que tales elementos se enfrentan al acta de inspección ocular (fs. 67) labrada por el Juez de Paz, de donde resulta: “... Existe zona de monte en ambas partes del inmueble. No se observan existencia de obras de infraestructura pública. No hay ningún servicio público prestado por la comuna”.

A su vez, los hechos constatados en el reconocimiento resultan conducentes con la prueba aportada por la empresa demandante. La Escritura N° 118 firmada por el escribano público Esteban Terán Mariño, en la cual se confecciona un Acta de Constatación realizada el 19/04/2015 (fs. 14). Allí, el escribano relata que ese día se constituyó en el inmueble en cuestión “a la cual accedemos por ruta nacional N°38, se observa en dicho sector de la ruta que las banquetas y espacios existentes entre la ruta N° 38 y la propiedad de la requirente se encuentran con pastizales” (fotografía N° 1). Luego refiere “Nos dirigimos por la Ruta N° 38 en sentido sur a un camino vecinal que se encuentra en dirección sur y pasando los vecinos del lindero-sur de la finca antes descrita, llegando a un camino vecinal que se accede girando en sentido oeste. Recorriendo el mismo observamos que presenta desniveles, poco enripiado, y en pastizales altos y malezas en las banquetas” (fotografía N° 2, el resaltado me pertenece). Ambas fotografías y el original del acta de constatación, como así también el plano completo de mensura y unificación están agregados en originales como prueba documental, según cargo del 19/06/2015.

Debe señalarse que tanto el acta confeccionada por escribano público como la actuación labrada por juez de paz, regularmente traídas a juicio, no han merecido descalificación por la contraria.

Debe destacarse, en este punto, que la valoración de estos elementos probatorios sella de manera favorable la pretensión de la firma actora. En efecto, del análisis de las pruebas emerge, sin margen a dudas, que aquellas erogaciones que se constató que fueron realizadas por la demandada no benefician al inmueble en cuestión. No se ven reflejadas en el cuidado de los caminos lindantes, que presentan desniveles, poco enripiado, y en el hecho comprobado de que el bien se encuentra rodeado de pastizales, que “existe zona de monte en ambas partes del inmueble”, no se observa la existencia de obras de infraestructura pública y “No hay ningún servicio público prestado por la comuna” (cfr. inspección ocular).

Surge entonces en el caso que, según la prueba producida -inspección ocular-, caracterizada por su inmediatez, se constata la ausencia del beneficio individualizado que la tasa en estudio debe necesariamente reportar. Ello no se ve modificado por la prueba documental -indirecta- que acreditaría gastos que se habrían realizado por tales conceptos, cuando, en los hechos, éstos no se han visto reflejados de modo particularizado en el inmueble de la firma demandante.

Como se ha sostenido a lo largo del proceso, la tasa es un tributo caracterizado por la prestación de un servicio público individualizado hacia el sujeto pasivo (Jarach, Dino, “Finanzas públicas y derecho tributario”, segunda edición, Abeledo Perrot, página 234) además de que esa prestación del servicio

debe ser “divisible y determinado en la persona o bienes del usuario” (García Belsunce, Horacio A., “Revisión parcial del concepto de la tasa como especie tributaria”, TR LALEY AR/DOC/3288/2006). En efecto, dichos servicios deben ser recibidos por los inmuebles ubicados dentro del territorio comunal.

Esto no se ha comprobado en la causa, conforme surge del análisis aquí efectuado, coincidente con el desplegado por el Dictamen del Sr. Ministro Fiscal, protocolizado por la Excma. Corte Suprema de Justicia junto con el pronunciamiento n° 1565 de fecha 11/11/2024.

Por lo expuesto, dada la falta de comprobación de la efectiva prestación de los servicios detallados en el artículo 131 de la Ley 5637 (Código Tributario Comunal) en esta causa, la pretensión de la actora tendiente a declarar la ilegitimidad de su cobro deviene admisible.

III. En suma, en autos se ha concluido que el CISI comunal es gravamen cuyo hecho imponible se liga inescindiblemente a la prestación de uno o más servicios por parte de la Comuna. En cuanto tal, su cobro se vincula con el costo-utilidad de la prestación, extremo que se ajusta a su naturaleza; a su vez, se concluye que en autos se ha comprobado la ausencia de tal vinculación efectiva en el predio de la firma demandante.

En virtud de lo expuesto, corresponde acoger la demanda promovida por Loma del Pila S.R.L. en contra la Comuna Rural de Huasa Pampa y declarar la ilegitimidad de su cobro en el específico caso de autos.

IV. Para concluir, no está de más advertir que, conforme lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración sino tan sólo a pronunciarse acerca de aquellas que son conducentes para decidir el caso y dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; 304:819; 307:1121; 308:2172; y 310:1835; entre otros).

V. Costas

No habiendo razones para apartarse del principio general que rige en la materia, se imponen a la demandada vencida (cfr. art. 105 del CPCC, de aplicación a este fuero por disposición del art. 89 del CPA). Honorarios, oportunamente.

La señora vocal Dra. María Florencia Casas, dijo:

Estando conforme con los fundamentos esgrimidos por la Señora Vocal preopinante, voto en idéntico sentido.

Por ello, esta Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, con la integración que surge del proveído de fecha 09/12/2024,

RESUELVE:

I. HACER LUGAR a la demanda interpuesta por **LOMA DEL PILA S.R.L.** contra la **COMUNA RURAL DE HUASA PAMPA**, conforme lo considerado.

II. COSTAS como se consideran.

III. RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER

Ana María José Nazur María Florencia Casas

Ante mí: María Laura García Lizárraga

Actuación firmada en fecha 28/03/2025

Certificado digital:
CN=GARCIA LIZARRAGA Maria Laura, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27260297665

Certificado digital:
CN=CASAS Maria Florencia, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27235182063

Certificado digital:
CN=NAZUR Ana Maria Jose, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27235197109

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.



<https://expediente-virtual.justucuman.gov.ar/expedientes/69ede3e0-0be0-11f0-8015-4b2a2f1e8956>